

# MEGAPROYECTOS Y RESISTENCIA EN MÉXICO EN EL CONTEXTO DE LA 4<sup>TA</sup> TRANSFORMACIÓN

---

FRANCISCO XAVIER VALENZUELA KAT\*

Con la victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador, en julio 2018, se comenzaron a aplicar las políticas que guiarían la ruta para la construcción del proyecto de sociedad anunciado durante su campaña rumbo a la presidencia. Entre los objetivos que se prometieron durante la carrera presidencial, que se encuentran en el actual Proyecto Nacional de Desarrollo (2019-2024), se hace hincapié en el combate a la corrupción, la disminución de la inseguridad y la violencia mediante el cambio de la estrategia de seguridad, así como el desmantelamiento de las políticas neoliberales, generadoras de mayor desigualdad, incremento de la migración y deterioro medioambiental, junto a otras externalidades negativas.

*\* Maestro en Comunicación por la UAM Cuajimalpa trabajó la intersección entre lengua, identidad y narrativas en nuevos medios en el caso de la producción audiovisual de la tradición Mazateca S'uik'ien. Actualmente colabora en el centro de D.D. H.H. Tepeyac en el istmo de Tehuantepec en proyectos de reconstrucción y comunicación comunitaria, también participa en colectivos culturales y de producción de video de la región.*

A pesar de estas promesas de campaña, en los hechos, López Obrador planeó la implementación de una serie de proyectos sociales regionales que, en su visión, detonarían el desarrollo regional en zonas estratégicas para cumplir la promesa de campaña de crecimiento anual de 4%, mediante la atracción de inversiones transnacionales y la generación de crecimiento en las poblaciones de la regiones sur y sureste de México: la refinería Dos Bocas, el Corredor Multimodal del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya, estandartes de este sexenio. Cabe señalar, que la aplicación de políticas neoliberales

y la firma de tratados como el TLCAN (1994), ahora T-MEC, han servido para generar las condiciones adecuadas en materia legal para la aplicación de esta clase de megaproyectos: reformas en educación, trabajo, propiedad y energía, entre otras; leyes que dan certeza a los inversionistas como la Ley Minera (1992), la Ley de Bioseguridad (2005) o la Ley de Inversión Extranjera (2012).

En el transcurso de las últimas tres décadas, caracterizadas por la implementación de políticas neoliberales, se ha observado que esta clase de megaproyectos provocan conflictos en los territorios y comunidades en donde son implantados: incremento de la violencia, rompimiento del tejido social, contaminación de mantos freáticos, concentración de los bienes naturales, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y otro sinnúmero de mecanismos de coerción estatal y paraestatal hacia las comunidades, especialmente campesinas e indígenas.

Y a pesar de ello, desde los discursos hegemónicos, los proyectos de desarrollo regional son aplaudidos, ya que supuestamente las regiones donde se instalan los proyectos se encuentran "atrasadas" y necesitan modernizarse, lo que se lograría generando las condiciones adecuadas para atraer inversión y detonar desarrollo y crecimiento para integrarse así, al mercado mundial.

A pesar de la larga historia de despojo de territorios, concentración de la riqueza y bienes naturales en un pequeño número de empresarios y políticos; de la alta desigualdad y la pobreza extrema de las regiones, ha habido un proceso continuo de resistencia desde distintas comunidades y actores que cuestionan los proyectos que portan el estandarte del desarrollo, y que han mantenido una distancia crítica hacia este mismo concepto: ¿Desarrollo para quiénes? y ¿a costa de qué? Son preguntas centrales de esta resistencia, como en el caso del 3<sup>er</sup> foro "No a la mina, sí a la vida", realizado en mayo del presente año en la comunidad de Lachatao, Oax. Este evento integró la participación de distintos frentes, asambleas, uniones, coordinadoras, espacios, entre otras formas de organización colectiva, para formar una red de defensa del territorio frente a los megaproyectos que tiene como consigna "Negamos el desarrollo que nos niega a nosotros" (CCMSS, mayo 21, 2019).

A pesar del marco legal que busca dar certeza a las inversiones transnacionales, la organización de los actores y los movimientos sociales que resisten el despojo y la devastación producen incertidumbre sobre el futuro de los proyectos y las ganancias proyectadas por los accionistas; y aunque son muy pocos los casos en los que ha logrado detener temporalmente distintos proyectos, como fue el caso de la comunidad de Santa María Zapotitlán, que logró obtener

un amparo contra una concesión minera en su territorio, no suelen ejercer suficiente presión para cancelar definitivamente los proyectos, sino que los amparos sólo detienen su avance por tiempo indefinido, ya que las empresas emplean distintos mecanismos para reactivarlos. Por esto, los defensores del territorio buscan, en cambio, derogar las leyes que permiten el despojo.

Entre los mecanismos que sirven para dar certeza y proteger los derechos de las comunidades sobre su territorio, están la consulta ciudadana y las consultas a las comunidades indígenas que, durante el sexenio actual, se han vuelto meros trámites administrativos para la aprobación de megaproyectos. Durante el primer semestre de este año se realizó una serie de consultas en las comunidades que se verían afectadas por la instalación de proyectos en la península de Yucatán y en el Istmo de Tehuantepec; en esta región se realizaron los días 30 y 31 marzo y 18 y 19 de mayo. No obstante, diversas organizaciones denunciaron que dichas consultas no cumplieron con las normas que establece el artículo 196 del convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establecen que deben ser libres, previas e informadas, adecuadas culturalmente y de buena fe. Esto no se cumplió, debido a la información parcial provista, el acarreo de personas, la escasa asistencia, la falta de traducción a lenguas originarias y la intimidación a defensores del territorio.

Cabe recordar que estas políticas neoliberales se enmarcan en un contexto de violencia que se ha generalizado a partir de la declaración de la guerra contra las drogas del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. La militarización del país para contener la violencia del crimen organizado sirvió como una cortina de humo para tomar control de las zonas estratégicas para la explotación de los recursos, como el caso de la cuenca de Burgos, que cuenta con importantes recursos energéticos, principalmente gas lutita, situación que documenta el periodista italiano Federico Mastrogiovanni. Dicho control territorial se ejerce, principalmente, a través del terror que genera la violencia, de desplazamientos, cobros de piso y desapariciones forzadas, entre otros mecanismos ejercidos por acción u omisión del Estado.

En campaña, López Obrador, como ya se mencionó, propuso un cambio en la estrategia de seguridad, por lo cual se establece en el PND la creación de un nuevo cuerpo de seguridad permanente, la Guardia Nacional, la cual se nutrirá de personal de la Policía Militar, la Policía Federal y la Policía Naval. El despliegue de la Guardia Nacional, que comenzó en junio de este año en la región sur y sureste, se dio tras las amenazas hechas a finales de mayo del año en curso por el presidente de los EUA de poner un arancel de 5% a los productos de México, con el objetivo de contener el constante flujo de migrantes en los 68 pasos fronterizos detectados (Padilla, 17 de junio, 2019).

A pesar del supuesto cambio de estrategia y del despliegue de la Guardia Nacional, la insostenible situación de violencia e inseguridad en el país no ha cambiado, por el contrario, ha aumentado en los meses que lleva el gobierno de la Cuarta transformación. La continuidad de los mecanismos de terror antes mencionados, en las zonas de desarrollo priorizadas por el sexenio actual, confirma que la ingeniería de conflictos es una herramienta muy eficiente para desestabilizar regiones y debilitar los movimientos sociales de lucha y resistencia.

A este respecto, se ha documentado la colusión de miembros del crimen organizado con empresas para controlar regiones, amenazando a defensores del territorio y líderes sociales, hasta llegar al asesinato y la desaparición forzada de los actores, como el caso reciente, en Cocula, Guerrero, del activista opositor a los proyectos de la minera Media Luna (filial de la canadiense Torex Gold), Oscar Hernández Romero, quien fue desaparecido el 23 de septiembre (REMA, 2010-2013) del presente año; o el asesinato del ambientalista José Luis Álvares Flores tras oponerse al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en Guatemala; y a principios de año, el asesinato de Samir Flores, en Amilcingo, Morelos, tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de catalogar como conservadores a los opositores a la termoeléctrica en Huexca, parte del proyecto Integral Morelos.

### **Megaproyectos energéticos para acelerar el extractivismo**

En concordancia con los objetivos del milenio propuestos por la ONU, con el fin de responder al calentamiento global, se aprobó la Ley de Transición Energética (2015) que busca que México use al menos 35% de energías renovables en su industria. Para cumplir dichos objetivos y reducir la emisión de gases de invernadero se han instaurado un sinnúmero de proyectos energéticos como los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, las presas hidroeléctricas, las centrales geotérmicas y termoeléctricas, el *fracking* y las granjas solares. El problema en el discurso de las energías limpias es que se minimiza la complejidad de las relaciones de los sistemas ecológicos y sociales que interactúan en los territorios; además, los proyectos se validan ideológicamente bajo el argumento de la producción sostenible de los megaproyectos (como la reciente campaña de minería sustentable), lo que polariza la discusión entre estar a favor del desarrollo y el progreso amigable con el medio ambiente, o estar en contra del crecimiento nacional, la generación de empleos y la transición a métodos de producción de energía menos contaminantes. Además, tras la reforma energética, se aprobó la participación de la inversión privada en dicho sector, lo que ha permitido que empresas de distintos ramos, minería, el entretenimiento y alimentación industrial, puedan

autoabastecerse energéticamente mediante la construcción de varios tipos de centrales energéticas, como lo muestran los mapeos realizados por el colectivo Geocomunes (s.f.).

Contrario a la promesa de campaña de fortalecer la soberanía energética, este modelo ha derivado en la erosión de la capacidad del Estado para producir energía, además de continuar el despojo sistemático a comunidades y la sobreexplotación de sus territorios. Bajo el supuesto del rescate al sector energético se plantea realizar una serie de modernizaciones a la infraestructura de producción energética como son las refinerías e hidroeléctricas. Sin embargo, estas últimas han generado graves impactos en las regiones donde son instaladas. Hasta 2016, en México había un total de 4,600 represas, las cuales han generado desde 1936 a 2006 más de 185 mil personas desplazadas, principalmente de territorios indígenas.

Para lograr entender el panorama general del desarrollo nacional y su integración en la economía global hace falta abordar uno de los mecanismos clave de creación más reciente, las Zonas Económicas Especiales (ZEE), actualmente conocidas como Zonas Libres. Aunque en el sexenio anterior se propusieron siete proyectos y se planearon dos más para ZEE, con la entrada del gobierno morenista se manifestó la intención de cancelar dichos proyectos. Sin embargo, distintos sectores empresariales de las entidades donde se tenían proyectadas las ZEE continúan ejerciendo presión para la continuación de las zonas, como son el caso de Puebla, para la producción automotriz y el puerto Lázaro Cárdenas, en Michoacán, donde se busca detonar la agroindustria, la minería y la siderurgia.

Por el momento, el gobierno federal ha dicho que se dará prioridad al megaproyecto conocido como Zona Libre del Istmo, que será parte del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, y que involucrará las ciudades de Coatzacoalcos y Salina Cruz al ser conectadas por el Corredor Multimodal Interoceánico. En ese plan se establece la importancia estratégica de dicha región al conectar los dos océanos en una franja de 300 km, lo que la vuelve competitiva para el transporte de mercancías, materias primas y energía. Además de integrar los bienes naturales como recursos disponibles para el desarrollo, son necesarios para la activación de los seis polígonos llamados Polígonos del Bienestar para el Desarrollo, que serán instalados a lo largo del CMI en: Acayucan, Minatitlán, Matías Romero, Ciudad Ixtepec, Coatzacoalcos y Salina Cruz.

## Conclusiones

El panorama actual de los megaproyectos resulta complejo, esencialmente por las contradicciones evidentes entre el discurso oficial y la realidad de las comunidades afectadas. A pesar de las promesas de campaña de cambiar el estrategia de seguridad y de erradicar las políticas neoliberales, en los hechos existe no solo una continuidad, sino incluso un incremento de la violencia, la militarización, el despojo, el extractivismo, la sobreexplotación de las poblaciones trabajadoras, así como de las condiciones que favorecen la desigualdad y la desintegración del tejido social, la acumulación de la riqueza y los bienes naturales; todo esto enmascarado por el discurso hegemónico y globalizado del desarrollo con energías limpias y renovables, la generación y el crecimiento sostenible. A pesar de la complejidad de la situación de la violencia ejercida contra los opositores a los megaproyectos, del control de los territorios y la presión contra las comunidades, los procesos comunitarios de resistencia continúan, propugnando por otro tipo de desarrollo que tenga en cuenta su cosmovisión, sus necesidades y el respeto a los bienes naturales.

## Referencias

- CCMSS. (Mayo 21, 2019). Di Sí a la vida, no a la minería: comunidades oaxaqueñas. Recuperado de: <https://www.ccmss.org.mx/si-a-la-vida-no-a-la-mineria-comunidades-oaxaqueñas/>
- Padilla, A. ( 17 de junio, 2019 ). En frontera sur, 2,400 elementos de la Guardia; no detendrán a migrantes, asegura el gobierno. En animal político. Recuperado de: <https://www.animalpolitico.com/2019/06/guardia-nacional-migrantes-frontera-sur/>
- Producción, transmisión, consumo y exportación de energía eléctrica en México: El avance de la privatización del sistema eléctrico. (s.f.). Recuperado de [http://geocomunes.org/Analisis\\_PDF/Centrales%20B%20lectura.pdf](http://geocomunes.org/Analisis_PDF/Centrales%20B%20lectura.pdf)
- REMA (Red mexicana de afectados por la minería. (2010-2013). Minera canadiense y crimen organizado en Cocula, Guerrero desaparecen a otro activista ambiental y líder opositor a la mina: ¡exigimos su presentación con vida! Recuperado de <http://www.remamx.org/2019/09/minera-canadiense-y-crimen-organizado-en-cocula-guerrero-desaparecen-a-otro-activista-ambiental-y-lider-opositor-a-la-mina-exigimos-su-presentacion-con-vida/>